

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de
dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: ANA PATRICIA CÓRDOBA GAVIRIA
Demandada	: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.
Radicado	: 050013105 018 2020 00196 01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social - pensión de sobrevivientes causada por muerte de hijo, dependencia económica, intereses moratorios.
Decisión	: Confirma Sentencia condenatoria
Sentencia No	: 238

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como **ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se condene al reconocimiento y pago de **pensión de sobrevivientes** causada por el fallecimiento de su hijo Juan Camilo Córdoba Gaviria, **intereses moratorios**. costas procesales. En subsidio, se ordene la devolución de saldos con la indexación.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que el señor Juan Camilo Córdoba Gaviria, hijo de la demandante, falleció el día 29 de abril de 2019, siendo afiliado a PROTECCIÓN S.A., donde había cotizado 50 semanas en los tres (3) años anteriores; se desempeñaba como entrenador personal y efectuaba cotizaciones con base en el salario mínimo legal, sin embargo, tenía ingresos adicionales derivados de la misma actividad en forma independiente entre los 4 y 5 millones de pesos mensuales; vivía con su madre Ana Patricia y en los últimos meses de vida, el grupo familiar también estuvo conformado con el compañero sentimental de la demandante; su hijo era el arrendatario del inmueble donde residían en Sabaneta y asumía este gasto, también aportaba en promedio \$1.300.000 mensuales para cubrir además la alimentación en el hogar.

La demandante ha laborado como Auxiliar de Contabilidad devengando el salario mínimo legal y aunque en extractos bancarios aparece un poco más, se debe a que allí le transfieren dineros para pagar aportes a la seguridad social; su compañero ingresó al grupo familiar en marzo de 2018 y aportaba para pagar los servicios

públicos, antes de eso solo vivía con su hijo; posterior al fallecimiento del afiliado, la novia de aquél vino a vivir con ella para ayudar a sufragar los gastos que antes asumía el causante. Reclamó la pensión de sobrevivientes el día 29 de mayo de 2019, siendo negada el día 29 de julio de ese año, aduciendo la entidad que no dependía económicamente del joven Juan Camilo.

Respuesta a la demanda:

PROTECCIÓN S.A. a través de apoderada, aceptó lo referente a la calidad de afiliado del señor Juan Camilo y densidad de semanas, la reclamación de la prestación económica y el no reconocimiento; sobre los demás hechos expuso que se trata de circunstancias de carácter personal sobre las cuales no ha tenido conocimiento; afirmó que, si el fallecido convivía con su progenitora, lo menos que podía hacer era aportar para el sostenimiento del hogar, como debe hacerlo un buen hijo de familia que disfrutaba de los servicios de vivienda, comida, lavada de ropa y vigilancia de sus enseres; según historial de cotizaciones la demandante aparece con ingresos laborales desde el año 1994 superiores al mínimo legal, con lo que podía obtener su propia subsistencia. Se opuso a la pretensión principal, no a la devolución de saldos. Propuso a en su defensa las excepciones denominadas falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Dieciocho Laboral** del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 23 de mayo de 2022, **condenó** a **PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar** a la demandante **pensión de sobrevivientes** causada por el fallecimiento de su hijo Juan

Camilo Córdoba Gaviria, a partir del **29 de abril de 2019**, en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, con 13 mesadas al año y **retroactivo pensional** por valor de **\$34.733.289 liquidado hasta el 30 de abril de 2020²**; continuar pagando la pensión de sobrevivientes a partir del **1° de mayo de 2022**, sobre el salario mínimo legal, sin perjuicio de los incrementos legales; ordenó el pago de **intereses moratorios** del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas pensionales reconocidas, desde el 1° de julio de 2019 hasta el momento del pago efectivo; costas a cargo de PROTECCIÓN S.A., fijando como **agencias en derecho \$1.736.664** en favor de la demandante.

Recurso de Apelación apoderada de PROTECCIÓN S.A.:

Afirma que deben estudiarse los acontecimientos al momento de fallecimiento del afiliado, sin que el hecho referente a que la demandante presentó dificultades económicas en forma posterior, esté relacionado con el objeto de litigio; los aportes realizados al hogar por el joven Juan Camilo eran destinados a su propio sustento, por lo que se reduce a los servicios públicos que él pagaba, la demandante contaba con los ingresos de su salario, lo que entregaba su hijo de manera solidaria y los del señor Rómulo que también ayudaba con servicios como gastos propios, de manera que el causante solo colaboraba para su manutención; el hecho que la testigo Claudia Arenas decidiera irse a vivir con la demandante no debe tomarse en consideración, más aún, cuando un año después, la señora Ana Patricia estaba viviendo en iguales condiciones que para la época en que falleció su hijo; concluye afirmando que no

² Si bien indicó que el retroactivo se reconoce hasta abril del año 2020 en la parte resolutive de la Sentencia de primera instancia, debiendo ser hasta abril de 2022 según se explicó en la parte motiva; lo cierto es que una vez revisado el cálculo se encuentra que el valor reconocido está bien liquidado.

existe una carencia respecto a la demandante, ni falta de capacidad para procurarse su propio sustento, sino que contaba con libertad económica para asumirlo. Por ello, no existe reticencia que sirva de base para la **imposición del pago de intereses**. Solicita se revoque la Sentencia de primera instancia.

Alegatos de conclusión:

La apoderada de Protección S.A. solicita se revoque la decisión de primera instancia, reiterando que no quedó acreditada la dependencia económica de la demandante respecto de su hijo fallecido y más bien, contada con los medios para satisfacer todas sus necesidades de manera autónoma.

Es así como, agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación por PROTECCIÓN S.A., de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si hay lugar a revocar la Sentencia de Primera Instancia; analizándose si la demandante acredita el requisito de la dependencia económica respecto de su hijo fallecido y si procede condena por intereses moratorios.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

Se encuentra por fuera de discusión en esta segunda instancia, que **Juan Camilo Córdoba Gaviria falleció el día 29 de abril de 2019** (folio 38 archivo 01); se encontraba afiliado al Sistema de Pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de PROTECCIÓN S.A., donde efectuó cotizaciones desde septiembre de 2014 hasta marzo de 2019 y acredita 226.43 semanas de cotización, de las cuales, 115.71 lo fueron en los últimos tres (3) años (ver historia laboral generada el 2 de octubre de 2019 folios 19 y 20 archivo 01); **la demandante reclamó pensión de sobrevivientes en calidad de madre del afiliado, siendo negada mediante comunicación del 29 de julio de 2019 aduciendo que no dependía económicamente**, ya que podía subsistir sin ser vulnerado el mínimo existencial (folio 24).

La Juez de Primera Instancia explicó que si bien la señora Ana Patricia contaba con ingresos propios equivalentes al mínimo legal, esto no la hacía autosuficiente, pues la contribución económica de su hijo Juan Camilo tenía la connotación de necesaria para los gastos del hogar, en lo atinente al arriendo y mercado, en

proporción superior a la que podía aportar; además que el señor Rómulo esposo de ésta, quien formó parte del hogar desde mediados de 2018, se desempeñaba en oficios de construcción de manera esporádica y no percibía recursos permanentes por la inestabilidad del empleo.

Frente a lo anterior, **la apoderada de PROTECCIÓN S.A. sostiene que los aportes realizados al hogar por el joven Juan Camilo eran destinados a su propio sustento**, solo colaboraba para su manutención, no existe una carencia respecto a **la demandante**, ni falta de capacidad para procurarse su propio sustento, sino que **contaba con libertad económica para asumir su subsistencia**. Sobre este tema tenemos que:

El artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, **serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste**, veamos:

“...ART. 74.—Modificado. L. 797/2003, art. 13. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente ~~de forma total y absoluta~~ de éste...”.

Con relación a lo anterior, la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-111 del 22 de febrero de 2006, declaró inexecutable la expresión “de forma total y absoluta” contenida en el literal d) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, precisando **una serie de criterios que permiten determinar si una persona es o no dependiente de otra, a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, esto es, una serie de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua**

subsistencia de cada persona en particular, en los siguientes términos:

“...En este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos:

1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.

2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.

3. No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.

4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.

5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.

6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica...” (Negrillas fuera de texto).

A su vez, la **Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL-102 de 2019**, reiterando su jurisprudencia, indicó que la *dependencia económica* requerida por la ley para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: ser **cierta y no presunta**, la participación económica debe ser **regular y periódica** y las contribuciones que la configuran deben ser **significativas respecto al total de ingresos de beneficiarios**, de manera que se constituyan en un **verdadero soporte o sustento económico**.

Así mismo, en **Sentencias SL386-2023, SL964-2023, SL2428-2023**, ha señalado que acceder a la pensión de sobrevivientes la dependencia económica de los padres no tiene que ser total y absoluta, pueden recibir ingresos por su propio trabajo o recursos de otras fuentes, siempre y cuando esto no los convierta en autosuficientes; advirtiendo que aunque no se exige una

dependencia total y absoluta, **no cualquier ayuda suministrada a los familiares puede ser prueba para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes**, ya que **el propósito del Sistema de Seguridad Social, es amparar a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba en forma real a mantener unas condiciones de vida determinadas**; explicando que debe existir un grado de dependencia, identificado a partir de la falta de autosuficiencia económica y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos que aportaba la persona fallecida. En la **SL3776-2022, retomando** SL4509-2020 y SL-14923-2014, recordó:

“...En tales términos, aunque no debe ser total y absoluta, en todo caso, debe existir un grado cierto de dependencia, que la Corte ha identificado a partir de dos condiciones: i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo...”.

Conforme a la prueba practicada en este proceso, tenemos que desde la presentación de la **demanda** y en **interrogatorio de parte**, la señora Ana Patricia aceptó que se ha desempeñado como auxiliar de contabilidad y ha devengado el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, lo cual se corrobora con las cotizaciones efectuadas al Sistema de Pensiones, según **historia laboral** obrante a folios 56 a 59; así mismo, la Directora Administrativa y Financiera de Virtual Community Builder S.A.S. certificó el 23 de mayo de 2019, que su empleada Ana Patricia recibía una remuneración de **\$828.116** desde el 5 de junio de 2018 (folio 39).

De acuerdo a la información vertida en la solicitud de prestación económica radicada ante PROTECCIÓN S.A., la demandante manifestó que su hijo aportaba para los gastos mensuales del hogar la suma de \$1.300.000, destinados a alimentación, arriendo, servicios y gastos varios, mientras que su compañero colaboraba, cuando tenía, con \$200.000 (folio 18 archivo 01).

Versión que fue corroborada con la **prueba testimonial**, conformada por las declaraciones de **Claudia Patricia Arenas Echeverri** y **Carlos Augusto Córdoba Alzate** (novia y primo del fallecido), quienes informaron que el joven Juan Camilo y su madre Ana Patricia siempre vivieron juntos, inicialmente en el Municipio de Caldas y en los últimos años, cuando el afiliado se graduó y obtuvo un empleo que le garantizaba capacidad económica, alquiló un inmueble en el Municipio de Sabaneta a donde se trasladó a vivir con su progenitora; sus ingresos oscilaban entre 4 y 5 millones de pesos derivados de su actividad como entrenador físico personal, **aportando entre \$1.200.000 y \$1.300.000 mensuales para el sostenimiento del hogar, los que se destinaban básicamente para asumir el pago de arrendamiento y alimentación**, mientras que la demandante costeara servicios públicos; expusieron que desde mediados del año 2018 el señor Rómulo hizo parte del hogar como compañero de la señora Ana Patricia, quien laboraba en el área de construcción y cuando tenía empleo también aportaba para el pago de servicios públicos.

Como parte integrante de la prueba documental, se encuentra copia de **contrato de arrendamiento para vivienda urbana de fecha 22 de noviembre de 2014**, con la agencia *Arrendamientos Envigado S.A.S. MA 42089*, sobre un inmueble con

nomencultura ubicada en el barrio El Carmelo del Municipio de Sabaneta, donde figura como arrendatario Juan Camilo Córdoba Gaviria, con un **canon por valor de \$450.000** (folios 60 y 61).

Lo anterior coincide con lo expuesto por los testigos, respecto a que era el afiliado quien asumía el costo del arriendo de la vivienda que habitaba con su madre. Debiéndose tener en cuenta que para el año **2014**, cuando inició dicho contrato, el valor del alquiler era muy cercano al salario mínimo legal vigente, que para la época era de **\$616.000**, por tanto, fácilmente puede inferirse que los ingresos de la señora Ana Patricia –también por el mínimo legal-, no le garantizaban la autosuficiencia económica, pues solo si alcanzaba a pagar el arriendo, con la diferencia de \$166.000 difícilmente podría asumir por su cuenta el mercado, pago de servicios públicos y demás necesidades básicas; contrario a ello, el aporte dinerario de su hijo tenía las características de ser periódico, significativo y representaba un verdadero soporte económico para su madre, que no queda desvirtuado por el hecho de haber conformado pareja con el señor Rómulo a mediados del año 2018, dado que la prueba practicada conduce a entender que por su oficio ocasional en la actividad de la construcción, ayudaba en esa medida, de manera fortuita, con \$200.000 para servicios públicos, lo que no conduce a tener por cierta la independencia económica de la demandante, respecto de su hijo.

En cuanto a que **deben estudiarse los acontecimientos al momento de fallecimiento del afiliado**, sin que el hecho referente a que la demandante presentó dificultades económicas en forma posterior, esté relacionado con el objeto de litigio y que la testigo Claudia Arenas decidiera irse a vivir con la demandante no debe tomarse en consideración; debe indicarse que, en efecto, para verificar si la reclamante dependía

económicamente de su hijo, el análisis probatorio se centra en los hechos acaecidos en vida del afiliado, verificándose si en el proceso se acredita una relación de subordinación económica, respecto de los recursos que la persona fallecida entregaba para el sostenimiento del hogar; sin que haya lugar a excluir en forma tajante, de qué manera cambió esa realidad y cuáles fueron las nuevas condiciones de vida que debió enfrentar quien aspira al reconocimiento pensional, ante la ausencia del apoyo económico del hijo de quien afirma dependía para su sustento; ello es así, porque si el propósito del Sistema de Seguridad Social es amparar a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba a mantener ciertas condiciones de vida, precisamente se hace necesario corroborar el deterioro de ese estatus o que ante su supresión, quien sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo.

Y en este caso, la decisión condenatoria no está sustentada en hechos ocurridos en forma posterior a la muerte del afiliado – como sugiere la recurrente–, sino en las pruebas que denotan el auxilio económico del causante en vida y su relevancia para el sostenimiento digno de la demandante; lo que se corrobora, al apreciarse que al desaparecer aquella ayuda, el impacto fue tal en las condiciones de vida de la madre del fallecido, que según la prueba testimonial, fue necesario que recibiera ayuda de la novia de su hijo, quien se trasladó para compartir con ella la vivienda y los gastos correspondientes.

De acuerdo a lo explicado, el hecho de contar la demandante con ingresos propios equivalentes al mínimo legal, no conducen de manera objetiva a negar el acceso a la prestación económica causada por la muerte de su hijo, pues con ello no quedó

demostrada su autonomía económica y aunque en el hogar existiera un ingreso adicional, si la madre no es autosuficiente y dependía de aquella ayuda económica, puede acceder a la pensión de sobrevivientes, al verse afectada tanto su subsistencia, como llevar una vida en condiciones dignas, al haber quedado privada de ese apoyo financiero; tal como lo concluyó el Juzgado.

Por último, **en cuanto a que no existe reticencia que sirva de base para la imposición del pago de intereses, no le asiste razón a la apoderada de la Administradora de Fondos de Pensiones**, toda vez que, conforme al contenido de la investigación administrativa obrante en el archivo 18, se evidencia que **la razón para haber negado el reconocimiento pensional fue la falta de dependencia total de la demandante respecto de su hijo**, al respecto la AFP concluyó lo siguiente:

*“...De acuerdo a las labores realizadas, se tuvo conocimiento que ANA PATRICIA CORDOBA GAVIRIA (solicitante), para la fecha de fallecimiento de su hijo se encontraba laborando y también tenía una unión marital de hecho con el señor ROMULO CARRETERO, quien también **aportaba para el hogar al igual que su hijo JUAN CAMILO CORDOBA GAVIRIA** y se logra establecer plenamente que dependía parcialmente de los aportes realizados por el causante, por lo tanto el sustento económico del hogar estaba a cargo de la solicitante ANA PATRICIA CORDOBA GAVIRIA y de JUAN CAMILO CORDOBA GAVIRIA, al igual del aporte de su Compañero permanente ROMULO CARRETERO. Por lo anteriormente expuesto, **se evidencia que la solicitante no dependía totalmente de su hijo para los gastos del hogar...**” (Negritas y subrayas fuera de texto).*

Condición de dependencia total y absoluta que no es exigible, conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables antes citadas, reconociendo la misma AFP en su investigación que la señora Ana Patricia sí **dependía parcialmente de los aportes del causante**; por tanto, el no pago de las mesadas pensionales por parte de la demandada fue injustificado, siendo procedente la

condena impuesta por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente **confirmar** en todas sus partes la Sentencia de primera instancia, incluyendo lo referente a la condena en Costas.

COSTAS:

En esta Segunda Instancia se condenará en costas a cargo de PROTECCIÓN S.A., al no haber prosperado el recurso de Apelación formulado, fijándose como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000) en favor de la demandante Ana Patricia Córdoba Gaviria; de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de

Apelación se revisa, incluyendo lo relativo a la condena en Costas; conforme a lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Se condena en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de **PROTECCIÓN S.A.**, fijándose como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000) en favor de la demandante **ANA PATRICIA CÓRDOBA GAVIRIA**; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

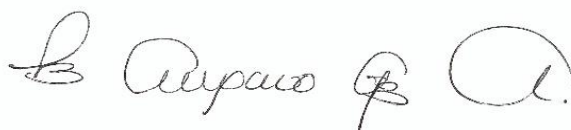
Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada Ponente



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **ANA PATRICIA CÓRDOBA GAVIRIA**
Demandada : **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**
Radicado : **050013105 018 2020 00196 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social - pensión de sobrevivientes causada por muerte de hijo, dependencia económica, intereses moratorios.
Decisión : Confirma Sentencia condenatoria
Sentencia No : **238**

FECHA SENTENCIA: 24 de noviembre de 2023

Fijado lunes 27 de noviembre de 2023 a las 8:00 a.m.

Desfijado lunes 27 de noviembre de 2023 a las 5:00 p.m.

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario